


INFORME
REGIONAL



IDENTIFICAR DESIGUALDADES PARA PLANIFICAR UNA PAZ DURADERA

Diciembre 2020

Gender Associations

GAIC- Gender Associations International Consulting GmbH (Gender Associations) fue creada en marzo del 2019 en Berlín, Alemania, dedicada a asesorar instituciones e individuos en el desarrollo de sus capacidades y competencias para promover y asegurar la igualdad de género y los derechos humanos. Esa asesoría es ofrecida mediante evaluaciones, investigaciones orientadas hacia la práctica, análisis de políticas, fortalecimiento de capacidades y capacitaciones, además de la construcción de redes y espacios inclusivos de diálogo en el campo de Mujeres, Paz y Seguridad e igualdad de género en general.

Nuestras diversas áreas de especialización derivan de décadas de experiencia trabajando con actores internacionales como el sistema de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, academia y gobiernos nacionales en diversas regiones geográficas en todo el mundo. Trabajamos con una red internacional de consultoras y consultores bajo la orientación temática, regional y estratégica de nuestro equipo de Asociadas y Asociados Líderes.

**GAIC – Gender Associations
International Consulting GmbH**
www.genderassociations.com

c/o Ufer Berlin
Paul-Lincke-Ufer 41
Berlin – 10999

Tel: +49 (0)157 355 27434
(Germany)
contact@genderassociations.com

El Proyecto “Capturing Inequalities to Plan for a Lasting Peace”, ha sido implementado por Gender Associations con el apoyo del Instituto de Relaciones Culturales Internacionales (Institut für Auslandsbeziehungen- ifa, por sus siglas en alemán) mediante su Programa zivik, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (Auswärtiges Amt).



El análisis y las opiniones expresados en este documento son los de las autoras y no necesariamente reflejan la posición política de las instituciones que apoyaron ese proyecto.

Proyecto **“Identificar Desigualdades para Planificar una Paz Duradera”**

Coordinación General del Proyecto: Nicola Popovic

Apoyo financiero y administrativo: Nadia Synytsia

**Asesora Regional sobre movimientos de mujeres
y defensoras de derechos humanos:** Denise Hirao

Asesora Regional sobre temas interseccionales de género: Diana López Castañeda

Responsable por el proyecto en Bolivia: Valeria Vilaseca

Responsable por el proyecto en Brasil: Renata Giannini

Colaboración en Brasil: ELAS Fondo de Inversión Social

Responsable por el proyecto en Chile: Andrea Paz Cerda

Diseño gráfico: Fabian Sixtus Körner

Foto de portada: Fabian Sixtus Körner

Agradecimientos

Las mujeres que participaron en las entrevistas y workshops de este proyecto son, en su mayoría, activistas que han trabajado incansablemente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Muchas enfrentan riesgos significativos a su propia seguridad, por lo que sus nombres no serán publicados en este informe. Gender Associations celebra su compromiso y agradece sus importantes insumos a este proyecto. Agradecemos asimismo a Alma Viviana Pérez, de ONU Mujeres, e Hilary Anderson, de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, por sus aportes a este proyecto.

1. INTRODUCCIÓN

América Latina es un subcontinente caracterizado por una gran diversidad humana, social y cultural, además de profundas desigualdades resultantes de los procesos históricos y coloniales. Así se han constituido sociedades marcadas por tensiones vinculadas a ideologías políticas y modelos económicos que han consolidado diversas estructuras de poder y resistencias. En la actualidad, existe una creciente preocupación por reducir la conflictividad, la violencia y avanzar en la consolidación de una paz duradera encaminada a una convivencia pacífica. Esta meta es solo alcanzable en la medida en que se consideren los legados históricos que soportan las estructuras, en conjunto con las circunstancias actuales que impactan comunidades e individuos en función no sólo de los roles de género, sino también de otros aspectos como la edad, pertenencia étnica, caracterización racial, nivel educativo, estatus social, origen o discapacidad. Esta mirada permite identificar con detalle y atención estrategias para abordar la prevención de los conflictos.

Aunque en América Latina y el Caribe hay pocos países que afronten conflictos armados - en su definición clásica -, hay varias zonas en donde los niveles de violencia son similares a zonas de guerra, mientras que otras zonas acumulan factores que potencian la violencia armada y el escalamiento de conflictos sociales. Entre estos se encuentran: el aumento de la pobreza y la desigualdad; el aumento de la violencia basada en género en el espacio doméstico -sobre todo en los contextos de cuarentena-; altos niveles de desempleo y empleo informal; incremento de la inseguridad alimentaria; el deterioro general de las condiciones de vida para las poblaciones más vulnerables, así como mayores demandas sociales y de salud insatisfechas¹.

De acuerdo con estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a pesar de los avances parciales alcanzados en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), esta continúa siendo la región más desigual del mundo². La creciente desigualdad económica golpea de forma más fuerte a aquellas poblaciones que son estructuralmente excluidas de participar en los procesos de toma de decisiones, especialmente cuando estos se dan en la centralidad de instituciones y gobiernos. Esa desigualdad extrema, unida a estructuras postcoloniales y a dinámicas de alta discriminación, conllevan un alto potencial de exclusión y conflicto. En los últimos meses, la pandemia del COVID-19 profundizó las desigualdades y demostró cómo la exclusión aumenta las inequidades y las tensiones sociales. Asimismo, el deterioro democrático y

1 "En democracias más jóvenes como Chile, o más frágiles como Irak, Líbano o Haití, los desafíos serán mayores. Muchos de estos países tienen sistemas económicos y políticos menos resistentes, altos niveles de desigualdad y, a menudo, redes de seguridad social y servicios públicos débiles. Por si fuera poco, ya desde antes de la pandemia enfrentaban una tensión severa, crisis de legitimidad y protestas populares masivas. Es probable que en un contexto de recesión económica mundial estas frustraciones sociales se agraven aún más y conduzcan al descontento y a la combustión social, incluso si se restauran las libertades políticas básicas." En "los grandes desafíos del COVID-19 y su impacto en la democracia" Silva-Leander, Annika Blogpost en <https://www.idea.int/es/news-media/news/es/los-grandes-desafios-C3%ADos-del-covid-19-y-su-impacto-en-la-democracia> Rescatado [29/05/20].

2 CEPAL. "La Matriz de la desigualdad social en América Latina". LC/C.2690(MDS.1/2). Naciones Unidas. Santiago de Chile: 2016. Pág. 16.

la violencia política, evidentes en varios países latinoamericanos, también son factores que pueden llevar a la eclosión o intensificación de conflictos armados.

A pesar de todo lo anterior, es incipiente el vínculo que se ha establecido entre el deterioro de la seguridad y la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) que, en los pocos casos en que es trabajada en la región, no es tratada como un tema doméstico sino relacionado con misiones de paz en el exterior. No obstante, la agenda MPS opera en conjunto con la agenda de desarrollo humano y la garantía de los derechos humanos. A este conjunto se sumó la Recomendación General 30 del Comité Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En el año 2020 se cumplen 20 años de la promulgación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas³ (UNSCR 1325). Esta resolución, en conjunto con las nueve subsiguientes resoluciones⁴ es resultado de un proceso global de movilización de organizaciones de mujeres. La adopción de este conjunto de resoluciones expresa el consenso internacional sobre la importancia de trabajar en cuestiones de paz y seguridad desde la perspectiva de las mujeres.

La resolución se sustenta en cuatro pilares:

- a. **Participación** de las mujeres en la toma de decisiones en procesos de paz,
- b. **Protección** de las mujeres y niñas de violencia a base de género y sexual,
- c. Inclusión de las mujeres y sus organizaciones en iniciativas de **prevención** de violencia y de conflictos armados,
- d. Consideración específica de las necesidades de mujeres y niñas en la repatriación, reintegración, **acción humanitaria** y reconstrucción post-conflicto.

La agenda contempla la prevención integral en situaciones de crisis, lo que incluye un conjunto de actividades que engloban retos presentes en América Latina. La inclusión del género en los temas de paz y seguridad incluye también la participación de las mujeres en las reformas del sector de seguridad y el acceso a la justicia⁵ no solo en los escenarios de conflicto armado sino también en situaciones de paz.

Es este el panorama en el que se enmarca el proyecto "*Identificar desigualdades para planificar una paz duradera*", el cual fue desarrollado por Gender Associations, gracias al apoyo financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania por medio del Programa zivik del Instituto de Relaciones Culturales Internacionales (*Institut für Auslandsbeziehungen*- ifa, por sus siglas en alemán), y fue aprobado en un proceso de selección abierto entre las integrantes de la

3 Consejo de Seguridad Naciones Unidas. S/RES/1325(2000) rescatado [20/05/20] [https://undocs.org/es/S/RES/1325\(2000\)](https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)).

4 UNSCR 1820 (2009), UNSCR 1888 (2009), UNSCR 1889 (2010), UNSCR 1960 (2011), UNSCR 2106 (2013), UNSCR 2122 (2013), UNSCR 2242 (2015) UNSCR 2467 (2019) y 2493 (2019).

5 DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women (2019), "Security Sector Governance, Security Sector Reform and Gender", in Gender and Security Toolkit. Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women. Pag 2.

red [Unidas](#). El presente proyecto se enmarca dentro del espacio para “*promover medidas de gestión del conflicto por parte de civiles, como una contribución a la prevención cívica de las crisis, la resolución de los conflictos, la estabilización y la construcción de la paz.*”

Este informe es uno de los resultados del proyecto e incluye una síntesis de la información y análisis que hicimos con base en revisión de literatura, entrevistas, consultas y encuentros con organizaciones de mujeres en Latino América, sobre todo en Bolivia, Brasil y Chile. La palabra “mujeres” en este informe se refiere al diverso conjunto de mujeres, lo que incluye a las mujeres trans. En una forma complementaria hemos desarrollado pautas de *acción* para cada país de enfoque, también como una serie de videos que presentan sugerencias para incluir una perspectiva de género hacia una paz duradera.

2. PAÍSES DE ENFOQUE

En toda la región la división social de género, apegada a roles tradicionales, ha mostrado un explosivo aumento de las desigualdades, sobre todo en lo que se refiere a nuevas formas de organización en tiempos de cuarentenas, distanciamiento social y autocuidado por la pandemia del COVID-19. La aparente estabilidad democrática en la región y especialmente en Bolivia, Brasil y Chile en verdad oculta tensiones sociales y conflictos abiertos o latentes, los cuales discutimos a continuación.

a. Bolivia

En Bolivia, un escenario de conflictos políticos y descontento social fue causado por el controversial cambio de gobierno ocurrido en octubre de 2019. En un esfuerzo por avanzar hacia un tercer periodo como presidente, y tras recibir la negativa en el referéndum de 2016 -invalidado por el Tribunal Constitucional Plurinacional al año siguiente- Evo Morales se postuló como candidato. Tras una apretada jornada electoral, el presidente Morales se declaró ganador de los comicios en primera vuelta. Las denuncias de fraude se sumaron a un descontento marcado por tensiones de clase y étnicas que movilizaron antagonistas de diferentes partidos políticos y sectores económicos contrarios a Morales. Agentes dentro del sector de seguridad (policía y cuerpos militares) se involucraron de manera activa en la salida de Morales del gobierno, la represión en las calles de sus manifestantes y la aprehensión de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS).

Con el establecimiento de un gobierno transitorio de Janine Añez, las tensiones aumentaron en lugar de disminuir y además se complicaron con la declaratoria de pandemia por el COVID-19 junto a la disposición obligatoria de las medidas de cuarentena. En lo social, se visibilizó una ruptura de clases entre las personas que tienen suficientes recursos socio-económicos para poder sobrellevar la cuarentena y quienes viven con ingresos ajustados al día, sin poder costear ni sus alimentos, ni las medidas adecuadas de salud, en caso de suspender temporalmente sus actividades. Luego de cambios de fecha, las elecciones nacionales tuvieron lugar en octubre de 2020 y llevaron a Luis Arce, del MAS, a la Presidencia.

La mayor parte de los conflictos imperantes en estos días en Bolivia se manifiesta en el ámbito político pero sus causas sobrepasan dicha esfera y encuentran sus determinantes en problemas sociales, culturales, económicos e incluso ambientales, irresueltos, ignorados o poco atendidos, los cuales fueron instrumentalizados en el ambiente político. Esto también se refleja en la esfera institucional donde las entidades estatales no se han adaptado de manera eficiente a las necesidades y exigencias de la sociedad, donde persisten estructuras postcoloniales y procedimientos extremadamente burocráticos, con sistemas de administración jerárquicos de corte machista.

Una de las causas más relevantes en la configuración de la actual situación de conflicto es la discriminación, la cual tiene diversas manifestaciones que van desde la discriminación por color de piel y características biológicas, la discriminación de clase, de quienes viven en espacios urbanos hacia los que viven en áreas rurales, hacia los pueblos indígenas, hacia las mujeres, hacia las personas LGBTIQ+ y hacia cualquier otro grupo de personas que se encuentran en desventaja respecto a quienes detentan, aunque de manera temporal, algún tipo de poder. Esta situación ha generado, una lucha de los distintos segmentos de la sociedad que se refleja, por ejemplo, en la confrontación del imaginario regional entre “cambas y collas⁶”, entre los grupos religiosos cristianos y los no cristianos, etc. En medio de estas parcializaciones que se construyen como factores de opresión, las mujeres son siempre las que sufren más, por la doble/triple discriminación.

En el área rural, se detectan conflictos ambientales en el marco de la lucha por el control del territorio tradicionalmente sostenida entre los pueblos indígenas, originarios campesinos y quienes controlan grandes extensiones de tierra, familias y grupos empresariales con poder económico.

Otro asunto que genera división y conflictos en la sociedad, el cual fue anotado como un problema prioritario entre las personas entrevistadas, es la injerencia de la religión en la política y por ende en la forma en que se establecen las reglas de la sociedad, lo que a menudo también genera discriminación en contra de religiones indígenas y /o hacia las personas con distinta identidad de género y orientación sexual.

Desde la perspectiva de las mujeres, la incertidumbre actual genera además tensionamientos sociales que tienden a generar un clima propicio para una mayor violencia de géneros, contra las mujeres y las feminidades. Anteriormente, mujeres que fueron figuras públicas sufrieron de hostigamientos y fueron violentadas por grupos extremos. Hasta el 15 de noviembre de 2020 y en el actual contexto, la fiscalía había registrado 104 denuncias de feminicidios en el año.

En el actual contexto socioeconómico, las desacertadas políticas económicas del gobierno encuentran que una buena parte de la población ha perdido sus fuentes

6 Camba es un término utilizado coloquialmente a partir de los años 30 en Bolivia aludiendo a las personas del oriente boliviano, sobre todo del departamento de Santa Cruz de la Sierra; de la misma forma, Colla se refiere a las personas del occidente Boliviano con más énfasis a la gente del departamento de La Paz; en la actualidad y aunque estas palabras son flexibles y mutables a sus contextos (negativos, positivos o del cotidiano); estas denominaciones representan identidades bolivianas que configuran un discurso histórico hegemónico regionalista y que en la mayor parte del tiempo se ven confrontadas por culturas, recursos, pensamientos, poder adquisitivo, etc.

de ingresos debido a la pandemia del COVID-19 y a ello se suma la prevalencia por el consumo de alcohol⁷ que aumenta los riesgos de la violencia de género y en el peor de los casos la ocurrencia de feminicidios. Adicionalmente, el manejo de la pandemia trajo consigo la paralización de actividades generadoras de ingreso para gran parte de la población, que vive del trabajo informal y que es mayormente femenina. La necesidad impulsó a esta población a retomar su trabajo a pesar de las normas de cuarentena, lo cual generó confrontaciones cuando los grupos de personas con mayores recursos económicos les tildaron de irresponsables por salir de sus casas, para asegurar su sustento diario, aun a riesgo de infectarse con el virus. Por todo ello, se considera que el actual momento de tensionamiento político y las condiciones socioeconómicas imperantes generan un ambiente de riesgo para las mujeres. En este contexto, el trabajo hacia la pacificación, la reconciliación y la alerta temprana de situaciones que podrían acrecentar los conflictos se hace imperante y urgente.

b. Brasil

El gobierno de Jair Bolsonaro ha sido criticado públicamente por gobernar a base de principios militaristas, misóginos, machistas y autoritarios que lo posicionaron como un candidato popular en las elecciones de 2018. Este triunfo político se dio tras un proceso de polarización de la sociedad que se intensificó en el *impeachment* de la presidenta Dilma Rousseff en el año 2016. Desde el gobierno, el actual presidente y muchos de sus funcionarios han naturalizado un discurso de odio hacia la diferencia en general, sea esta racial, de género, étnica, ideológica, etc. Además, ha defendido la represión policial y el mayor acceso a armas por parte de la población. En 2019, el incremento del número de muertes por fuerzas estatales fue el principal factor que llevó Brasil a ser considerado un país con nivel de conflicto "5", equivalente a un estado en guerra, por el *Conflict Barometer 2020*.⁸

Con la crisis del COVID-19, el gobierno ha desoído las recomendaciones internacionales de promover un cese parcial de actividades y aislamiento preventivo. En consecuencia, la propagación de la enfermedad en Brasil ha estado fuera del control. Durante la crisis de la pandemia, Bolsonaro intensificó la centralización de su gobierno, fortaleció aún más el rol de militares y de representantes del "ala ideológica" ultraconservadora en su gobierno.

El escenario de alta conflictividad social, que incluye focos importantes de conflicto armado, se ha profundizado en los últimos años, con importantes consecuencias hacia las mujeres, por lo que la agenda de MPS resulta pertinente. La UNSCR 1325 fue reconocida por primera vez por sectores militares, en particular desde los centros de capacitación en mantenimiento de la paz. Además, el Plan de Acción Nacional (ANP) de Brasil, centrado en la política exterior y de defensa, fue criticado por no reflejar las experiencias de las mujeres brasileñas de manera amplia.

Al mismo tiempo, la compleja realidad de múltiples fuentes de conflicto y violencia en Brasil, con efectos nocivos para las mujeres, hace de la agenda MPS una herramienta poderosa para expresar las experiencias de las mujeres y resaltar sus resistencias. Entre las principales experiencias de conflicto relevadas están:

7 Información disponible en el siguiente link: <https://www.bolivia.com/actualidad/nacionales/bolivia-entre-los-paises-que-mas-consumen-alcohol-208973>

8 <https://hiik.de/wp-content/uploads/2020/03/CoBa-Final-%C3%BCberarbeitet.pdf>

Conflictos urbanos: varias entrevistadas subrayaron que las altísimas tasas de homicidio de personas negras representan un proceso de genocidio, siendo parte del racismo estructural del país. Las mujeres negras son particularmente afectadas por la violencia y el racismo, lo que incluye desde la violencia psicológica y simbólica hasta la violencia física y sexual, así como feminicidios y asesinatos dentro y fuera de sus casas. Con la muerte de jóvenes negros, en su mayoría hombres, se devasta la vida de familiares sobrevivientes; lo que se combina con otras violencias menos visibles como amenazas, violencia sexual y doméstica, y violencia psicológica y simbólica contra las mujeres. En consecuencia hay traumas y pérdidas económicas que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente las mujeres negras, en las áreas periféricas de las grandes ciudades.

Conflictos en el campo: Según la Comisión Pastoral de Tierras, hubo 1.833 conflictos de tierra en 2019, el 60% de ellos en la Amazonía. Estos conflictos resultaron en el asesinato de muchos defensores ambientales y activistas, el 85% en la Amazonía. En las zonas rurales, las mujeres están al frente de los conflictos por la tierra y por ello se han convertido en lideresas en este ámbito, presidiendo sindicatos de agricultores y otros asentamientos rurales, como *quilombolas* o movimientos sociales como el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) y el Movimiento de Personas Afectadas por Represas (MAB).

Conflictos en los bosques: especialmente en la Amazonía, se intensifican los avances del desarrollo depredador y extractivista auspiciado por el actual gobierno. La minería ilegal, la deforestación, la extracción, la quema y los megaproyectos llevan a las poblaciones indígenas, *quilombolas* y ribereñas a sufrir la contaminación de los ríos, la disminución del tamaño del bosque y de las tierras de cultivo; a lo anterior se suman la violencia y enfermedades provocadas por estas empresas. Según las activistas entrevistadas, las mujeres se ven particularmente afectadas debido a su papel específico en sus aldeas como responsables de los cultivos ribereños, la horticultura para autoconsumo y las tareas de aprovechamiento forestal. Las mujeres de las zonas de bosques son también objeto de violencia de género, incluida la explotación sexual, la violación, la trata de personas y la prostitución no asistida⁹. Algunas entrevistadas también mencionaron el aumento de la violencia doméstica en paralelo con el aumento del uso de alcohol y drogas.

El retroceso de la democracia también se ha identificado como una gran amenaza para las mujeres brasileñas. A raíz de la creciente presencia e influencia de grupos religiosos, militares y conservadores en la vida política y en el Estado, en la actualidad se evidencia la suspensión de las políticas orientadas a la igualdad de género, así como la oposición al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en la política exterior. Adicionalmente, se identificó una reducción significativa del espacio cívico de acción, la proliferación de discursos y prácticas de extrema derecha en paralelo con la violación de las libertades fundamentales. Todo lo anterior se hace aún más evidente con hechos como la persecución de lideresas, periodistas y defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente,

⁹ El término "prostitución no-asistida" fue utilizado por algunas entrevistadas, especialmente de la región amazónica, para referirse a la situación de trabajadoras del sexo sin asistencia, protección legal y con alto riesgo de explotación.

que a menudo resultan en agresiones e incluso asesinatos. Además, la censura artística, la vigilancia ciudadana, la difusión de noticias falsas, campañas de desinformación y el cierre de instancias de participación ciudadana, son indicios de que el espacio cívico se ha reducido y que la democracia brasileña está retrocediendo. Este escenario intimida la participación política sobre todo de las mujeres, y más aún de mujeres negras, LGBTIQ+ e indígenas.

c. Chile

En la última década, diversas manifestaciones ciudadanas y protestas callejeras han demandado cambios estructurales en Chile. Lo anterior ha hecho evidente el descontento hacia políticas neoliberales, tales como: la privatización de la educación, las pensiones y la salud, así como la precarización del empleo y de las condiciones de vida en general. Las demostraciones masivas del movimiento estudiantil han exigido gratuidad en la educación pública desde el 2011. En el 2018 millares de mujeres jóvenes marcharon en el “mayo feminista” en contra la cultura patriarcal y la violencia de género. Finalmente el año 2019 estuvo caracterizado por una ola de protestas que culminó en octubre con el llamado “estallido social chileno”, en el cual se dieron manifestaciones inmensas que fueron reprimidas y criminalizadas por el Estado. En este marco, se aplicó el estado de excepción y salieron militares y policías a la calle a enfrentar manifestaciones en principio pacíficas, que rápidamente se tornaron violentas y terminaron en crudos enfrentamientos callejeros. Hubo miles de detenciones ilegítimas, también sumarios administrativos y judiciales a las policías por el uso abusivo de armas de disuasión menos letales (balines y gases lacrimógenos). A su vez se reportaron numerosas denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de parte de las fuerzas policiales en medio de las manifestaciones, así como numerosas denuncias por violencia, acoso y abuso sexual.

En el contexto de esta crisis, este proyecto entrevistó e invitó a conversar sobre la agenda de MPS a feministas y activistas locales, con el fin de conocer el sentido que le daban a esta agenda en Chile. Se identificó que la UNSCR 1325 es en general desconocida, se considera lejana y poco sensible a los contextos locales. La participación de las organizaciones de mujeres en la agenda de seguridad es también distante. A pesar de que existe una palpable preocupación por las amenazas específicas contra las mujeres, estas no son entendidas como un problema central de la seguridad nacional. La criminalización de la demanda mapuche y la respuesta militarizada a este conflicto son motivos de especial preocupación, así como la escasa capacidad de escucha y sintonía de las autoridades con la problemáticas sociales y la criminalización de la protesta social.¹⁰

10 Tal como se señala en el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) “La decisión gubernamental, tanto en el estallido social como frente a la protesta mapuche, de tratar las demandas sociales como un asunto exclusivamente de seguridad pública ha traído consigo más violencia innecesaria y radicalización de la protesta. Esto ha tenido graves consecuencias para las personas, por ejemplo, el caso de una niña de 9 años que fue herida por un perdigón en un ataque a camiones, incendios de maquinarias y viviendas y otras vulneraciones a los derechos humanos. Nos parece inaceptable que la respuesta estatal frente a la protesta mapuche no sea el diálogo político, sino la utilización desmedida de la fuerza y la criminalización de quienes reivindican sus derechos.” En UDP “Informe Anual de Derechos Humanos”, 2020. Pág. 247 disponible en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2020/06_Derechos_Humanos_de_los_Pueblos_Ind%C3%ADgenas_en_Chile.pdf rescatado [8/12/2020]

En Chile como en otras partes se vieron las inequidades sociales aun mas al frente de la pandemia del COVID-19. En tiempos de pandemia, pese a la intensificación de las violencias, la crisis de los cuidados y la mayor vulnerabilidad a la que se vieron enfrentadas durante el confinamiento, las mujeres se organizaron para hacer frente a la crisis. En Chile se afianzaron los lazos de colaboración forjados antes de la crisis sanitaria y los colectivos continuaron trabajando en el autocuidado. Las organizaciones de base se movilaron para levantar agendas locales con sentido para sus comunidades para entretejer redes de protección tanto social, económica y de cuidados. También se avanzó en la generación de alertas feministas para denunciar la violencia de género y se reiteró el interés en continuar trabajando articuladas construyendo redes de apoyo y contención.

En el nuevo escenario político, los temas de seguridad cobran un nuevo sentido para las organizaciones de mujeres y feministas. Los actuales procesos políticos invitan a repensar el tradicional significado del término seguridad y la forma en que la institucionalidad puede establecer lazos más cercanos con los territorios. En este contexto es necesario hacer eco de las nuevas ciudadanía representadas en numerosas organizaciones de mujeres en Chile, que se construyen desde el cuidado de lo local y las comunidades, pero que escasamente encuentran una vía institucional de validación política. A su vez el nuevo escenario plantea el desafío a las organizaciones feministas y de mujeres de integrarse en procesos de reforma al sector de seguridad y la reforma de carabineros- institución sumergida en una profunda crisis- y avanzar articuladamente en el debate que permita proponer nuevas visiones de seguridad e instalar cambios sustantivos en esta materia.

Aunque las bases de la nueva constitución no serán 100% representativas y satisfactorias desde un punto de vista feminista, la conclusión de este proyecto destaca la importancia de instalarse en el debate constituyente una política de protección y cuidados sociales, y a acercar política y estratégicamente los temas de seguridad a la acción y el trabajo de las organizaciones sociales de mujeres.

3. Perspectivas a futuro

El escenario de crisis en los tres países a finales de 2019 cambió significativamente durante el 2020. De un lado se profundizaron algunas tensiones debido a la pandemia del COVID-19, la cual amplió las desigualdades sociales y dejó aún más vulnerables a las poblaciones en contextos de violencia y carencias económicas. Por otro lado, a lo largo de 2020, la crisis política tuvo momentos de intensificación, como las incertidumbres respecto a la fecha del plebiscito de la Constitución en Chile y de las elecciones presidenciales en Bolivia, así como las amenazas de oficiales gubernamentales en contra del Congreso y la Suprema Corte en Brasil.

Afortunadamente, al fin del 2020, la crisis política se ha atenuado en los tres países. En Bolivia, elecciones pacíficas llevaron al partido MAS de vuelta al gobierno nacional, con una amplia mayoría de votos y, aunque hubo amenazas, fueron pocos los incidentes violentos en contra del resultado final. En Chile, un plebiscito aprobó, con 79% de los votos, la elección de una Convención Constitucional y,



con el 80%, la paridad entre hombres y mujeres entre los representantes que serán elegidos para la redacción de la nueva Constitución. En Brasil, los discursos autoritarios del Gobierno Federal han disminuido un poco en los últimos meses del año y la extrema derecha sucumbió en las elecciones locales de noviembre del 2020, en las cuales muchas nuevas lideresas negras, trans y de la periferia fueron elegidas para los parlamentos municipales en todo el país.

Esos cambios en el escenario político ayudan a alejar los riesgos inmediatos de ruptura democrática y conflictos internos de largo alcance, pero su contribución para una paz duradera depende de múltiples factores. En Bolivia, por ejemplo, será clave la capacidad del nuevo gobierno de llevar a cabo sus políticas sin intensificar la polarización del país y crear escenarios de reencuentro y diálogo. En Chile, el proceso constituyente recién empieza con la elección de representantes en abril de 2021. A su vez, Brasil no ha cambiado su escenario político tan significativamente como los otros países y persiste una fragilidad democrática intensa.

El escenario de momento es muy complejo. Por un lado, un mayor deterioro democrático podría empeorar las situaciones de violencia; de otro lado, los presentes cambios no significan una mejora inmediata en la vida de quienes están en estos contextos. Este proyecto ofreció la oportunidad de escuchar a mujeres en todo tipo de situación y entender su perspectiva. En Bolivia, la sensación de inseguridad abarca situaciones personales, colectivas y comunitarias que aumentaron en razón de las tensiones del fin del 2019. En Chile, muchas han denunciado la violencia sexual en las manifestaciones políticas; y en Brasil, varias claman por el reconocimiento de que ya viven en una guerra.

En términos de la intensidad y la escala de los conflictos, es importante destacar dos situaciones:

- ◆ Para muchas mujeres entrevistadas en este proyecto en Brasil, ellas ya viven una situación de guerra. De hecho, las tasas de homicidios, son similares a los de conflictos armados intensos, incluso por parte de fuerzas estatales. Tales homicidios – como la violencia en general – afecta especialmente a la **población negra**, la cual sufre las consecuencias del racismo estructural y el incidental en lo cotidiano. En los talleres realizados con activistas brasileñas, se planteó la importancia de reconocer al racismo no como tema transversal a los conflictos sino como causa estructural de un conflicto armado que configura un genocidio. Las mujeres negras, sobrevivientes de esos conflictos, además de perder sus familiares y enfrentar la violencia en general, ven la violencia sexual y de género ser tratada como un efecto marginal de un conflicto que mata especialmente a hombres jóvenes y también le quita la vida a varias de ellas.
- ◆ Es sumamente preocupante la situación de las **mujeres indígenas** – en su inmensa diversidad – en los tres países, en donde las activistas entrevistadas compartieron preocupación con: narrativas que deshumanizan a los pueblos indígenas, con la criminalización de su actuación política y con disputas territoriales vinculadas con actividades extractivistas, agrícolas y mineras. En la región amazónica de Brasil y Bolivia, tales prácticas empiezan frecuentemente con la destrucción del bosque nativo y traen consigo

consecuencias irreparables, que se han intensificado por la pandemia de COVID-19. La propia sobrevivencia física y cultural de los pueblos indígenas, la cual está vinculada a su territorio y al medio ambiente, está bajo riesgo en la Amazonía. Para las mujeres indígenas, esas tensiones generan un aumento de violencia basada en género, la explotación sexual y el tráfico de personas; a su vez ven afectadas sus responsabilidades en la provisión de alimentos provenientes de ríos y bosques; así como otros efectos negativos como la pérdida de saberes ancestrales en el manejo de ecosistemas.

La situación de las mujeres negras y de las indígenas en Brasil, Bolivia y Chile ilustran perfectamente cómo la desigualdad está en la raíz de los conflictos presentes y potenciales en Latino América. El nivel de conflictividad - distinto en los tres países - está directamente relacionado con la historia de explotación desde los tiempos coloniales, la exclusión de gran parte de la población y el racismo que se expresa de diversas maneras, incluso con violencia. En ese escenario, la desigualdad de género juega un rol relevante y genera altas tasas de violencia basada en género en los tres países.

a. Sugerencias hacia una paz duradera

Si las mujeres son particularmente vulnerables en situaciones de tensión y conflicto armado, ellas también son esenciales para construir una paz duradera. Para eso, en las conversaciones de este proyecto, muchas participantes mencionaron que es necesario primero redefinir el concepto de paz, el cual tiene que alcanzar no sólo la ausencia de conflictos sino también la presencia de una democracia plena y la superación de las desigualdades de forma a que la “paz” alcance de hecho a todas las personas.

El tema de la protección, autocuidado y cuidado mutuo de defensoras de derechos humanos de las mujeres fue planteado fuertemente en los encuentros de los tres países. Varias mujeres entrevistadas en este proyecto reportaron intensa persecución digital y presencial, lo que incluso ha llevado algunas activistas al exilio, especialmente en Brasil. También mencionaron tácticas típicas de resistencia en países opresores, como la adopción de formas secretas de comunicación y la creación de mecanismos de protección mutua, sin contar con el Estado. Se requiere un mejor nivel de cooperación y colaboración entre las redes feministas y de los defensoras de derechos humanos.

Para algunas, iniciativas como redes de defensoras pueden fortalecer su trabajo y ayudar a prevenir situaciones de vulnerabilidad para las participantes. Para otras, tales redes y otras iniciativas similares pueden salvarles la vida. Activistas compartieron mecanismos de alerta y respuesta temprana, como el ejemplo de un grupo de activistas que logra trasladar a una compañera a otra ciudad en caso de amenazas a su vida. Otras activistas compartieron su incapacidad de llevar sus denuncias – respecto a ellas propias o a la población con quien trabajan – a esferas que puedan ofrecer una respuesta efectiva, lo que indica la clara necesidad de fortalecer mecanismos que alcen la voz de las personas invisibilizadas en y por los conflictos.

Las participantes de talleres de este proyecto compartieron sugerencias de estrategias de movilización y pautas para la acción destinadas a la prevención de conflictos, como:

- ◆ Defender la democracia y la participación política, lo que estuvo - y en algunos casos aún está - bajo severo riesgo.
- ◆ Enfrentar causas estructurales de los conflictos, lo que incluye las desigualdades de género, étnico-raciales, económicas, geográficas etc. Se propone entonces la revisión de políticas económicas excluyentes y ampliar la oferta y cobertura de los servicios públicos de calidad.
- ◆ La lectura desde la ecología política y los feminismos ambientales identifica el extractivismo como una causa estructural de la degradación ambiental y la violencia de género.
- ◆ Fortalecer alianzas internas dentro de los movimientos feministas: por ejemplo, buscando acercar grupos de mujeres en el nivel local con organizaciones más institucionalizadas de alcance nacional; priorizando el tema del racismo vinculado a la violencia en la agenda política de las organizaciones feministas. Otras alianzas importantes se entretajan entre generaciones, especialmente donde las más jóvenes abrevan de las experiencias de perseverancia, adaptación discursiva y resistencia de las mujeres más adultas, quienes a su vez renuevan sus discursos, adoptan nuevas herramientas y puntos de vista a partir de la relación con las más jóvenes. La apuesta debe apuntar a densificar la intensidad de los apoyos.
- ◆ Ampliar alianzas de los grupos feministas con otros actores: identificar estratégicamente a potenciales aliados y aliadas en instituciones clave como la policía y el Poder Judicial; trabajar de manera conjunta con el sector salud y educación y ampliar alianzas internacionales.
- ◆ Proponer medidas para mejorar la *seguridad ciudadana*, tales como la reforma (o posible refundación, en el caso de Chile) de instituciones de seguridad -instituciones policiales y fuerzas armadas-, la capacitación de los efectivos policiales, la creación de mecanismos de monitoreo y la inserción de mujeres con perspectiva de género en espacios de decisión.
- ◆ Redefinir el concepto de *seguridad ciudadana* de modo a que incorpore el concepto *seguridad humana*.
- ◆ Promover la educación por la igualdad de género, racial y étnica en las escuelas, buscando formar nuevas generaciones comprometidas con dicha transformación.

Para casos sistemáticos de violencia, una estrategia sería analizar elementos relacionados a la escalada de la violencia y anticiparse a ellos. Por ejemplo, los pueblos de los bosques y selvas, especialmente los indígenas, a menudo ven sus tierras invadidas por acciones de minería artesanal, que frecuentemente marcan el inicio de conflictos violentos y la destrucción de los ecosistemas. Urge una acción conjunta entre autoridades y población indígena y local para zonificar áreas proclives al deterioro causado por la minería.

b. Indicadores de Alerta Temprana desde una Perspectiva de Género

De manera similar, los indicadores de alerta temprana sirven para anticipar potenciales situaciones de conflicto y violencia armada¹¹. Como los conflictos identificados por este proyecto fueron bastante diversos, también fueron múltiples los indicadores de alerta temprana desde una perspectiva de género y diversidad.

Algunos ejemplos:

- ◆ Al reconocer que el debilitamiento extremo del Estado a menudo está conectado con la intensificación de tensiones políticas y conflictos violentos, se subrayó la importancia de indicadores relativos al tema, como el rápido aumento de circulación de *fake news* políticas y de mensajes de odio como en Bolivia, por ejemplo.
- ◆ En Bolivia, Brasil y Chile, el número de amenazas a defensoras de derechos humanos es un indicador importante para antever posibles escaladas de violencia física en contra de ellas. La sistematicidad, la agresividad y el contenido de tales amenazas también son indicadores relevantes cualitativos.
- ◆ El número de personas afectadas por violencia armada desagregado por sexo, edad, origen étnico, clase social etc. puede ser otro indicador. En el caso de Brasil, por ejemplo, esa desagregación revela que la mayoría de las personas asesinadas son negras. En ese sentido, las participantes de los encuentros de este proyecto reconocieron las 10 etapas del genocidio¹², en la página de Genocide Watch, como indicadores útiles para alertar sobre lo que ellas definen como un proceso genocida en el país.

La gran mayoría de las participantes en talleres de este proyecto coincidieron en que indicadores de alerta temprana pueden ser de extrema utilidad para algunas situaciones. En el nivel macro, pueden identificar tendencias y proveer insumos para el diseño de estrategias de cabildeo e incidencia política. En el nivel local, pueden prevenir la violencia o mitigar sus consecuencias, pero solo si están conectados a mecanismos de respuesta rápida y efectiva. Posiblemente, en esos casos, más allá del desarrollo indicadores, es importante perfeccionar canales de comunicación y vínculos con quienes tienen poder de decisión o presión.

Uno de los datos más relevantes resultado de este proyecto es la pertinencia de la agenda MPS en los contextos nacionales de Bolivia, Brasil y Chile por diversas razones. El deterioro democrático y escalamiento de la violencia que tuvieron lugar entre finales de 2019 y parte de 2020 demostraron la necesidad de precisar en torno a la prevención de conflictos. La intensidad y la rapidez de tales procesos evidenciaron un alto grado de conflictividad social latente en esas

¹¹ En la revisión de literatura realizada para este proyecto se identificaron las siguientes características relacionadas con sistemas eficaces de alerta temprana: identifican factores e indicadores que están frecuentemente correlacionados con la eclosión de conflictos armados; analizan esa información, teniendo en consideración el contexto y los riesgos estructurales del conflicto violento en el país; formulan escenarios de potencial evolución – el mejor y el peor escenario – así como opciones de respuestas; están conectados con sistemas de respuesta rápida; buscan evitar la eclosión del conflicto armado, el escalamiento de la violencia o disminuir su nivel de destrucción.

¹² “Ten stages of genocide.” Disponible en: <https://www.genocidewatch.com/tenstages>

sociedades, que pueden explotar como en las demostraciones masivas en Chile; generar conflictos políticos violentos, como en Bolivia; o resultar en un proceso violento como el caso de más de 35.000 personas negras asesinadas en Brasil cada año. Las causas estructurales de esa conflictividad social son distintas para cada caso, pero tienen una similitud: las fuertes desigualdades económicas y sociales. Se concluye, por tanto que, en Bolivia, Brasil y Chile, es necesario trabajar fuertemente en la prevención de conflictos de forma asociada con el fortalecimiento de la democracia y el abordaje de las causas estructurales de desigualdades económicas y sociales.

Al discutir ese escenario, los encuentros de este proyecto reconocieron la relevancia de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y empezaron a plantear el concepto de seguridad desde una perspectiva humana y feminista, en la que la propia definición de seguridad y paz es revisitada. Propuestas de incidencia política fueron discutidas en cada país y están resumidas en documentos denominados “pautas para acción” para Bolivia, Brasil y Chile.